tearse en la práctica en sus relaciones mutuas. En vista de ello, la mención de « Organización » sólo puede denotar al Secretario General o al funcionario ejecutivo principal, como se indica expresamente en el párrafo 4 del comentario a dicho artículo. Sólo el Secretario General puede ejercitar el tipo de diplomacia discreta necesaria para que la Organización desempeñe su función de enlace entre el Estado huésped y el Estado que envía al resolver cuestiones prácticas que no llegan a constituir una controversia formal.

76. El párrafo 2 del artículo 49 constituye una salvedad merced a la cual, si las consultas no tienen éxito, se puede recurrir a cualquier otro mecanismo que se establezca para la solución de las controversias formales. El artículo en su conjunto tiene por objeto resolver las dificultades prácticas que surgen en la diplomacia multilateral por faltar las instituciones que existen en la diplomacia bilateral.

77. Sugiere que el artículo 44 se remita al Comité de Redacción, que deberá examinar también la cuestión suscitada por el Sr. Kearney acerca de la posibilidad de tratar separadamente el principio y el mecanismo previstos en su enmienda: el principio en el artículo 44 y el mecanismo en el artículo 49.

78. El PRESIDENTE propone que el artículo 44, juntamente con la enmienda del Sr. Kearney, se remitan al Comité de Redacción, en los términos indicados por el Relator Especial.

Así queda acordado ⁵.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

⁵ Véase reanudación del debate en el párr. 1 de la 1024.ª sesión.

999.ª SESIÓN

Viernes 13 de junio de 1969, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Bartoš, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castrén, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Raman-gasoavina, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsu-ruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldoock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

(A/CN.4/218/Add.1)

[Tema 1 del programa]

(continuación)

ARTÍCULO 45

I.

Artículo 45

Actividades profesionales

El representante permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente no ejercerán en el Estado huésped ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 45 que figura en el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/218/Add.1). Puesto que ningún miembro desea formular comentarios al respecto, propone que se remita el artículo 45 al Comité de Redacción.

Así queda acordado ¹.

ARTÍCULO 46

3.

Artículo 46

Modos de terminación

Las funciones del representante permanente o de los miembros del personal diplomático de la misión permanente terminarán principalmente:

a) Cuando el Estado que envía comunique que las funciones del representante permanente o de los miembros del personal diplomático de la misión permanente han llegado a su término;

b) Cuando el Estado que envía deje de ser miembro de la Organización de que se trate, o cuando haya sido suspendido o hayan sido suspendidas sus actividades en esa Organización.

4. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el apartado *b* se refiere a tres casos en los que la función de una misión permanente termina como resultado de acontecimientos relativos a la participación del Estado que envía en la Organización. El primero es el caso de la terminación o retiro, previsto en los instrumentos constitutivos de muchas organizaciones. El segundo es el caso de la suspensión de un miembro, reglamentado también, por lo general, en los instrumentos constitutivos. El tercero es el caso de la suspensión, por el Estado que envía, de sus actividades en la Organización, en virtud de una decisión unilateral de dicho Estado. Como el Relator explica en el párrafo 2 del comentario, el tercer caso ha sido sugerido por el ejemplo de Indonesia entre el 1.º de enero de 1965 y el 28 de septiembre de 1966. Las medidas adoptadas por Indonesia en aquella ocasión, y el cierre de su misión en Nueva York, se interpretaron no como un retiro de las Naciones Unidas, sino como una suspensión de su participación en las actividades de la Organización.

5. El artículo 46 no prevé la posibilidad de que el gobierno del Estado huésped pida que una persona que goce de privilegios e inmunidades abandone el territorio de ese Estado. Como se señala en el párrafo 4 del comentario, la única Convención que contiene una disposición en tal sentido es la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados ². No existe una disposición similar en la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas ni en ningún acuerdo de sede. Además, en las respuestas de los asesores jurídicos de los organismos especializados se indica que no se ha planteado nunca un caso en el cual se haya aplicado la disposición pertinente de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados. No se ha solicitado nunca la retirada de un representante per-

¹ Véase reanudación del debate en el párr. 1 de la 1025.ª sesión.

² Véase Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 33, pág. 336, sección 25.

manente o de un miembro de una misión permanente en aplicación de dicho artículo.

6. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro de la Comisión, piensa que sería preferible utilizar, al comienzo de la primera frase del texto inglés, la expresión «*the permanent representative*», en lugar de «*a permanent representative*». En la Convención de Viena se justificaba la referencia a las funciones de «*a diplomatic agent*», debido al número de tales agentes, pero éste no es el caso de los representantes permanentes.

7. En la primera línea del apartado *a*, deben añadirse las palabras «a la Organización», después de las palabras «el Estado que envía», a fin de reproducir *mutatis mutandis* el artículo correspondiente de la Convención de Viena³.

8. La disposición del apartado *b* no parece justificada, puesto que, aun en el caso de que el Estado que envía deje de ser momentáneamente miembro de la Organización o suspenda sus actividades en la misma, puede conservar, sin embargo, un representante permanente ante ella. Además, deberían sustituirse las palabras «la Organización de que se trate» por las palabras «la Organización».

9. El Sr. YASSEEN comparte los puntos de vista del Presidente sobre el apartado *b*. Mientras un Estado no se haya retirado verdaderamente de la Organización, o mientras sólo se haya retirado provisionalmente, habrá que aplicar a la situación una solución especial en cada caso.

10. Sir Humphrey WALDOCK estima también que resulta demasiado rígido estipular que las funciones de un representante permanente, o de un miembro de una misión permanente, terminan automáticamente cuando las actividades del Estado que envía en la Organización han sido simplemente suspendidas en virtud de una decisión unilateral de dicho Estado. Sería desacertado considerar que el representante permanente ha cesado de actuar en tal calidad precisamente en el momento en que probablemente se realizarían esfuerzos diplomáticos para resolver la situación.

11. El supuesto de la suspensión de la calidad de miembro del Estado que envía, en virtud de una decisión formal de la Organización, es evidentemente distinto en ese caso, es lógico pensar que terminan las funciones del representante permanente, en cuanto tal. Incluso en esta circunstancia, el orador no está convencido de que deba darse carácter estricto a la norma de que el representante permanente debe ausentarse del Estado huésped en un plazo razonable. Al igual que en el caso de ruptura de relaciones diplomáticas, puede ser conveniente mantener ciertos contactos entre la Organización y el Estado interesado. Así pues, el representante permanente podría permanecer en el país, aunque no en su calidad anterior.

12. El Sr. KEARNEY dice que algunas de las dificultades planteadas obedecen quizás a la circunstancia de que el artículo 46 trata de regular dos cuestiones

bastante diferentes; la primera es la determinación del momento en que terminan las funciones del representante permanente, o de los miembros de la misión permanente; la segunda es la consecuencia lógica, es decir, que el interesado debe abandonar el territorio del Estado huésped, o que sus privilegios e inmunidades cesarán. Tal vez conviniera prever expresamente este segundo punto en otro lugar.

13. En el caso de suspensión de las actividades del Estado que envía en la Organización, sería anómalo que la totalidad de los miembros de la misión permanente, que han quedado totalmente inactivos, permaneciese en el Estado huésped y disfrutase de plenos privilegios e inmunidades. Sería difícil justificar la prolongación de estos privilegios e inmunidades por tiempo indefinido.

14. El Sr. EUSTATHIADES comparte la opinión del Presidente, del Sr. Yasseen y de Sir Humphrey WALDOCK, de que no conviene estipular en el artículo que las funciones del representante permanente terminan cuando «hayan sido suspendidas sus actividades [del Estado que envía] en esa Organización». Aun cuando el Estado que envía decidiera por su propia voluntad suspender sus actividades, como hizo Indonesia, ello pudiera significar que dicho Estado cesa de cooperar con la Organización, pero no que retira a su representante permanente.

15. En este sentido, hay cierta interrelación entre los apartados *b* y *a*. Si el Estado que suspende sus actividades decide al mismo tiempo dar por terminadas las funciones de su representante permanente, lo notificaría a la Organización, tal como se establece en el apartado *a*. Pero quizá debería también preverse el caso de cesación temporal de la condición de miembro. Si en la frase inicial se reemplazaran las palabras «terminarán principalmente» por las palabras «pueden terminar principalmente», quedarían previstos todos los casos posibles, y no habría necesidad de hacer mención en el apartado *b* del retiro voluntario temporal de la Organización, ni de establecer una distinción entre la suspensión de actividades por decisión del Estado que envía y la suspensión acordada por la Organización.

16. Aunque no se adoptara la solución sugerida por el orador, sería de todos modos inapropiado incluir en el apartado *b* del artículo la frase «o hayan sido suspendidas sus actividades en esa Organización».

17. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) manifiesta que, en el caso de una decisión formal de una organización de expulsar a un miembro, es difícil imaginar que se permita al representante permanente seguir actuando en calidad alguna.

18. No le han convencido las dudas expresadas por algunos de los miembros respecto de la inclusión de una referencia a la suspensión por el Estado que envía de sus actividades en la Organización. Sin duda, se trata de un caso muy particular; pero como se ha presentado en la práctica, existen razones para preverlo en el artículo 46.

19. En el caso de Indonesia, en las Naciones Unidas se adoptó un criterio pragmático. La conclusión del

³ *Op. cit.*, vol. 500, pág. 174, artículo 43.

orador sobre este punto es que el Comité de Redacción debería tratar de separar este caso de los demás previstos en el artículo 46, puesto que las consecuencias no serían idénticas. Otra posibilidad sería explicar en el comentario que, en el caso especial de suspensión de actividades por el propio Estado que envía, podrían terminar las funciones del representante permanente; la situación es diferente de la de terminación de la calidad de miembro, en cuyo supuesto dichas funciones forzosamente terminarían.

20. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 46 sea remitido al Comité de Redacción.

Así queda acordado ⁴.

ARTÍCULO 47

21.

Artículo 47

Facilidades para salir del territorio

El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado huésped, así como los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuese necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes.

22. El PRESIDENTE sugiere que, puesto que ninguno de los miembros desea formular observaciones al respecto, el artículo 47 se remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado ⁵.

ARTÍCULO 48

23.

Artículo 48

Protección de locales y archivos

1. Cuando terminen las funciones de una misión permanente, el Estado huésped estará obligado a respetar y a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la misión permanente, así como sus bienes y archivos. El Estado que envía deberá retirar esos bienes y archivos en un plazo razonable.

2. El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto armado, dar facilidades al Estado que envía para retirar los archivos de la misión permanente del territorio del Estado huésped.

24. El PRESIDENTE sugiere la remisión del artículo 48 al Comité de Redacción, puesto que ningún miembro desea formular observaciones al mismo.

Así queda acordado ⁶.

ARTÍCULO 49

25.

Artículo 49

Consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización

1. Se celebrarán consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización sobre cualquier cuestión relativa a

⁴ Véase reanudación del debate en el párr. 4 de la 1025.ª sesión.

⁵ Véase reanudación del debate en el párr. 1 de la 1026.ª sesión.

⁶ Véase reanudación del debate en el párr. 1 de la 1026.ª sesión.

la aplicación de los presentes artículos. Tales consultas deberán en particular celebrarse por lo que respecta a la aplicación de los artículos 10, 16, 43, 44, 45 y 46.

2. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en los presentes artículos o en otros acuerdos internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales, o de cualesquiera normas pertinentes de la Organización.

26. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) señala que la cuestión de las consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización fue ya debatida por la Comisión al examinar en las dos sesiones precedentes el artículo 44 y la enmienda del Sr. Kearney ⁷.

27. En la última frase del párrafo 1 se hace mención expresa de diversos artículos de particular relevancia en la materia. El párrafo 1 tiene por objeto resolver las dificultades cotidianas que suscita la aplicación de ciertos artículos tales como el 16, relativo al número de miembros de la misión permanente, o el artículo 44, que se refiere a la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. Su objeto no es resolver las controversias formales sobre la aplicación o interpretación del proyecto de artículos. Para esas controversias han de preverse otros medios de solución, posiblemente en las cláusulas finales del presente proyecto, o elaborarse unos medios de solución *ad hoc* para controversias concretas.

28. La cláusula de salvedad que figura en el párrafo 2 estipula, por consiguiente, que el párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en el proyecto de artículos o en otros acuerdos internacionales en vigor o de cualesquiera normas pertinentes de la Organización. Sobre este último aspecto, en el párrafo 7 del comentario se explica que la expresión «normas pertinentes» es lo suficientemente amplia para abarcar los instrumentos constitutivos, resoluciones o la práctica imperante en la Organización.

29. Durante el debate sobre el artículo 44, se suscitó la cuestión de cuál sería en la Organización el órgano competente para participar en las consultas. Como se indica en el párrafo 4 del comentario, ese órgano sólo puede serlo el funcionario ejecutivo principal de la Organización, es decir, el Secretario General o el Director General, según los casos. Las delicadas cuestiones que pueden ser objeto de tales consultas se prestan mejor a ser tratadas por la diplomacia prudente de un funcionario ejecutivo principal que en un debate general de un órgano deliberante de la Organización.

30. No es insólito que en un acuerdo internacional se prevean consultas obligatorias. Por ello, el Relator Especial aporta en el párrafo 5 del comentario ciertos datos sobre la cuestión.

31. El Sr. TAMMES dice que el Relator Especial ha hecho una distinción entre las dificultades de índole práctica y las controversias más formales sobre la aplicación o la interpretación del proyecto de artículos. En la primera categoría deben incluirse las controversias

⁷ Véase la 997.ª sesión, párr. 71.

relativas a las disposiciones del proyecto respecto de las cuales cabe que haya abusos; tales disposiciones solamente pueden ser interpretadas con precisión teniendo en cuenta las situaciones concretas. No es posible dar interpretaciones *in abstracto* para conceptos tan elásticos como el número de miembros de una misión, la no discriminación, las actividades profesionales y la injerencia en los asuntos internos.

32. La segunda categoría abarcará las normas jurídicas más precisas que figuran en el proyecto. Toda controversia relativa a la aplicación o a la interpretación de esas normas debe ser sometida al procedimiento ordinario de solución de controversias. Del debate se desprende que el artículo 46, relativo a los modos de terminación, enuncia una de esas normas jurídicas precisas, por lo cual al Sr. Tammes le sorprende un tanto ver que figura en la enumeración de los artículos que revisten especial importancia a los efectos del párrafo primero del artículo 49.

33. Las disposiciones del artículo 44, que figuran también en esa lista, parecen pertenecer a ambas categorías al mismo tiempo, ya que pueden dar lugar no solamente a dificultades prácticas sino también a controversias de naturaleza más formal. El debate de la sesión precedente sobre la propuesta del Sr. Kearney de insertar un nuevo párrafo 3 en el artículo 44 apuntaba en ese sentido. Por tanto, el orador sugiere suprimir en el párrafo 1 la lista de artículos, particularmente si se tiene en cuenta que la enumeración no tiene carácter exhaustivo.

34. En la práctica internacional se suelen prever las negociaciones como la primera fase del proceso de solución de una controversia. Esa fase de diplomacia serena estaría representada, por lo que respecta a las dificultades prácticas previstas en el artículo 49, por el procedimiento de consultas instituido en el mismo. Únicamente si fallan las negociaciones será sometida la controversia a un medio de solución más formal.

35. El Sr. KEARNEY dice que la Convención sobre el derecho de los tratados, firmada en Viena el 23 de mayo de 1969, es probable que entre en vigor antes que cualquier convención futura sobre las misiones permanentes. En consecuencia, si se produce una controversia entre el Estado huésped y el Estado que envía acerca de la aplicación de alguna de las disposiciones de los artículos del presente proyecto, es posible que una de las partes acuse a la otra de violación grave de esos artículos y tal acusación hará que entren en juego las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

36. Por desgracia, tales disposiciones excluirán a la Organización internacional de cualquier procedimiento oficial que se aplique a tenor de la Convención de Viena. Ello representa una consecuencia lamentable ya que una controversia de esa índole interesará en grado sumo a la Organización. La Comisión debe examinar oportunamente y de manera detenida este problema, a fin de velar por que el proyecto sobre las misiones permanentes sea completo en lo que se refiere a las consultas y otros medios de solución de las controversias.

37. Sir Humphrey WALDOCK dice que parece haber acuerdo general en el sentido de que el Relator Especial y el Comité de Redacción deben tratar de reforzar o mejorar las disposiciones del artículo 49 teniendo en cuenta el debate sobre el artículo 44 que se realizó en las dos reuniones precedentes.

38. Sería erróneo escoger determinados artículos para hacer mención especial de ellos en el párrafo 1 del artículo 49. No hay razón, por ejemplo, para que no se mencionen también otros artículos, como el 48, relativo a la protección de locales y archivos; la experiencia reciente en el campo de las relaciones diplomáticas ha demostrado la posibilidad de que surjan controversias en relación con el deber del Estado huésped de proteger los locales y archivos de una misión. Conviene, por ello, evidentemente, que el procedimiento de consultas sea aplicable a otros muchos artículos además de los mencionados en el texto actual del párrafo 1.

39. El PRESIDENTE, que interviene en calidad de miembro de la Comisión, dice que apoya plenamente el principio en que se basa el artículo 49. Sin embargo, el Comité debería encontrar una redacción más afortunada para la frase «sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos», ya que algunos de ellos, y el artículo 10 en particular, no se refieren de ningún modo al Estado huésped. Más aún, sería mejor no mencionar concretamente ningún artículo.

40. En la primera frase del párrafo 1 del texto francés habría que reemplazar las palabras «*doivent avoir lieu*» por las palabras «*auront lieu*» y se debería especificar que las consultas deben celebrarse a solicitud de una de las partes interesadas.

41. El Sr. EUSTATHIADES dice que, aunque en el proyecto debe figurar un artículo sobre las consultas, no puede aprobar la redacción que se ha propuesto para el artículo 49. Se debería decir simplemente que las consultas son convenientes y que podrán llevarse a cabo en determinadas circunstancias. No basta con decir en el comentario que las consultas no tienen que ser necesariamente tripartitas, sino que hay que señalar claramente en el propio artículo qué partes han de intervenir en ellas, según las circunstancias.

42. Además, aunque el comentario proporciona algunas explicaciones relativas a la solución de controversias, habría que indicar en el artículo el tipo de dificultades prácticas que se han tomado en consideración. Por otra parte, no se debería hacer en él ninguna referencia a los artículos cuya aplicación puede exigir la celebración de consultas.

43. No conviene mencionar, como se hace en el párrafo 7 del comentario, la práctica imperante en la Organización entre las «normas pertinentes» a que se refiere el párrafo 2 del artículo, ya que si la práctica no prevé tales consultas el artículo 49 será inaplicable.

44. También duda de que sea atinado afirmar en el párrafo 1 que «se celebrarán» consultas, lo cual las hace obligatorias. A su juicio, sólo deben realizarse consultas cuando sean necesarias.

45. El Sr. USTOR apoya la idea que contiene el artículo 49 y le satisface la redacción del artículo en general.

46. Sin embargo, en lo que se refiere al comentario, debería emplearse un lenguaje menos rígido en el párrafo 4. Es ir demasiado lejos decir que el término « Organización » « debe entenderse que denota el funcionario ejecutivo principal » de la Organización, o que, « por consideraciones de orden práctico es necesario que las consultas previstas en el artículo 49 se celebren » con dicho funcionario. En la mayoría de los casos corresponde, en realidad, a un funcionario de la secretaría llevar a cabo las consultas, pero no parece acertado establecer una norma rígida al efecto. Cabe pensar en casos en que un pequeño grupo de representantes constituye el órgano más apropiado para la celebración de las consultas.

47. Sir Humphrey WALDOCK dice que es importante mantener un elemento de obligatoriedad en el artículo 49, ya que la finalidad del mismo es establecer que existe una obligación de efectuar consultas.

48. Tal vez parece de demasiado general la frase « cualquier cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos ». De lo que se trata en realidad es de resolver solamente los problemas que no puedan ser zanjados entre el Estado huésped y el otro Estado interesado. La dificultad señalada por el Sr. Eustathiades probablemente podría resolverse con un cambio de redacción del artículo.

49. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que la discusión sobre el artículo 49 ha puesto de relieve cuatro puntos. En primer término, parece evidentemente necesario un artículo de esa índole que prevea un sistema adecuado de consultas. En segundo lugar, como ha señalado insistentemente Sir Humphrey Waldoock, ese artículo debe tener carácter imperativo. En tercer lugar, como han señalado también otros oradores, es preferible que en el párrafo 1 no se haga referencia a ningún artículo en especial. En cuarto lugar, el artículo debe formularse de modo que permita consultas tanto bipartitas como tripartitas.

50. El Sr. TSURUOKA opina que el artículo 49 es muy útil, si no indispensable, en particular para la solución de las controversias que pueden plantearse entre el Estado que envía y el Estado huésped cuando no mantengan relaciones diplomáticas directas; en todos los demás casos, los problemas suelen resolverse en las capitales respectivas por los conductos ordinarios. El Comité de Redacción debe tener presente tal consideración.

51. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo con Sir Humphrey Waldoock en que debe conservarse el carácter obligatorio de las consultas. Con respecto a las palabras « cualquier cuestión », deberán interpretarse en el sentido de « cualquier dificultad » y no en el de « cualquier tema », que sería demasiado amplio. El Comité de Redacción debería encontrar una expresión más adecuada.

52. Está de acuerdo con otros miembros en que convendría especificar que las consultas deben cele-

brarse a petición de una de las partes interesadas y en que no es necesario mencionar algunos artículos concretos cuya aplicación puede exigir consultas.

53. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que el Sr. Tammes, apoyado por la mayoría de la Comisión, ha puesto en tela de juicio la necesidad de incluir en el artículo 49 una referencia concreta a determinados artículos. Esa referencia se incluyó con miras a llenar un vacío que se observaba en el proyecto, por no existir los recursos de que dispone un Estado receptor en la diplomacia bilateral. El Relator Especial consideró que el artículo 49 no debía ser demasiado restrictivo y que, aunque estuviese redactado en términos generales, debía hacer especialmente hincapié en los artículos en que el Estado huésped no disponía de los recursos habituales.

54. Con respecto a la palabra « cuestión », que figura en el párrafo 1, el Sr. El-Erian pensó en algunos términos tales como « controversia », « diferencia », « situación » y « problema », pero, a su juicio, las palabras « controversia » y « diferencia » más bien correspondían a artículos sobre el arreglo de controversias en las cláusulas finales de los tratados, y la palabra « problema », que vaciló en introducir, no le pareció un término jurídico. Con cierta renuencia, se decidió entonces por la palabra « cuestión » a fin de indicar el tipo de situaciones prácticas que, según pensaba, debían ser objeto de consultas.

55. El Sr. Eustathiades ha expresado dudas en cuanto a que en las organizaciones impere necesariamente una práctica con respecto a las consultas y ha señalado que, de no haber tal práctica, ello significaría que no habrá consultas. El Relator Especial confía en que en cualquier caso haya consultas, pero el artículo tiene por objeto dejar a salvo la práctica existente. Las respuestas que se han recibido hasta ahora de los organismos especializados parecen indicar que no existe tal práctica, pero el Relator Especial espera lograr en el futuro informaciones más precisas.

56. El Presidente ha criticado la referencia que se hace al Estado que envía, el Estado huésped y la Organización, por estimarla demasiado general, y ha señalado que el proyecto contiene algunos artículos que no conciernen al Estado huésped. El Relator Especial nunca se ha sentido muy satisfecho de la redacción del artículo y, con el concurso del Comité de Redacción, tratará de encontrar alguna fórmula que abarque la mayor gama posible de situaciones.

57. Está de acuerdo con el Sr. Ustor en que el párrafo 4 del comentario es demasiado rígido, especialmente debido al empleo de la palabra « debe » en la segunda línea, y tratará de encontrar un enunciado menos categórico.

58. Toma nota de que la mayoría de la Comisión es partidaria de que las consultas sean obligatorias, y de que el Presidente ha sugerido que en el texto francés las palabras « *doivent avoir lieu* » se sustituyan por « *auront lieu* ». El Sr. Eustathiades ha sugerido que en el artículo debe especificarse quiénes serán parte en las consultas, según las circunstancias. Ha puesto en duda también la necesidad de que las consultas sean

obligatorias y se ha mostrado partidario de una disposición de carácter más general. El Relator Especial tenía entendido que la Comisión deseaba que se previesen consultas obligatorias y en su comentario ha citado algunos ejemplos de disposiciones en tal sentido. A su juicio, aunque tales disposiciones no vayan acompañadas de sanciones concretas, tienen un valor de por sí, puesto que tienden a iniciar un procedimiento diplomático discreto y, por tanto, a asegurar cierto período de apaciguamiento cuando se produce una controversia.

59. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 49 se remita al Comité de Redacción junto con la enmienda del Sr. Kearney.

*Así queda acordado*⁸.

60. El PRESIDENTE declara que la Comisión ha concluido el examen del proyecto de artículos sobre las misiones permanentes ante organizaciones internacionales contenido en el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/218 y Add.1), y felicita al Sr. El-Erian por su excelente labor.

61. El Sr. TABIBI, que habla también en nombre del Sr. Ruda, felicita calurosamente al Relator Especial por haber coronado con acierto una labor llena de dificultades. Sugiere que el cuarto informe del Sr. El-Erian sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales sea sometido oportunamente a los Estados Miembros, al objeto de tener en cuenta sus observaciones cuando la Comisión proceda a la segunda lectura del proyecto de artículos.

62. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) agradece las muestras de simpatía y consideración con que la Comisión ha acogido su informe.

Colaboración con otros organismos

(A/CN.4/215 y A/CN.4/217)

[Tema 5 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

63. El PRESIDENTE invita al Sr. Caicedo-Castilla, observador designado por el Comité Jurídico Interamericano, a que dirija la palabra a la Comisión.

64. El Sr. CAICEDO-CASTILLA (Observador designado por el Comité Jurídico Interamericano) dice que, durante el último año, el Comité Jurídico Interamericano se ha visto honrado por la asistencia a algunas de sus sesiones del Sr. Ruda, en calidad de observador de la Comisión de Derecho Internacional, y que aprobó la siguiente resolución.

65. «El Comité Jurídico Interamericano,

» *Considerando* :

» Que el Comité desde hace varios años ha mantenido relaciones de cooperación con la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas;

» Que esa Comisión ha realizado y realiza una labor trascendental en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional;

» Que la Comisión de Derecho Internacional ha enviado al Embajador José María Ruda para asistir como observador a las sesiones del Comité en el presente año;

» Que el Sr. Ruda, actualmente Presidente de la Comisión de Derecho Internacional, es una personalidad eminente de la América Latina y en su país ocupa el alto puesto diplomático de Embajador Jefe de la Delegación de la República Argentina ante las Naciones Unidas en Nueva York,

» *Resuelve*

» 1. Expresar su complacencia por el hecho de recibir un observador de la Comisión de Derecho Internacional,

» 2. Agradecer que ese observador sea el propio Presidente de la Comisión, insigne jurista latinoamericano,

» 3. Reafirmar su propósito de mantener las mejores relaciones de cooperación con la Comisión de Derecho Internacional,

» 4. Transcribir esta resolución al Sr. Secretario de la Comisión de Derecho Internacional. »

66. El Sr. Ruda ha rendido sobre las actividades del Comité en 1968 un informe (A/CN.4/215) en el cual resume los debates sobre las diversas cuestiones de fondo estudiadas por el Comité, a saber: armonización de las legislaciones de los países americanos sobre sociedades, incluidos los problemas de las sociedades públicas internacionales, proyecto de «convención interamericana sobre el reconocimiento mutuo de sociedades y personas jurídicas», proyecto de ley uniforme de títulos-valores para la América Latina y normas de derecho internacional privado aplicables a las diversas cuestiones referidas.

67. Prevalen las materias de orden privado y mercantil porque ellas se relacionan directamente con la integración económica de los países latinoamericanos, que es una de las nuevas metas que debe tratar de realizar la Organización de los Estados Americanos. Al Comité Jurídico Interamericano se le ha atribuido la tarea de estudiar los aspectos jurídicos de la integración económica, lo cual representa una labor ardua pero que tendrá su recompensa si se establecen instituciones que hagan progresar a las naciones de la América Latina y les permitan conquistar su pleno desarrollo.

68. El Sr. Ruda menciona otro trabajo del Comité, la redacción de su futuro Estatuto, cuyo proyecto se acompaña como anexo a su informe. Este proyecto determina cómo debe funcionar el Comité una vez que entre a regir el Protocolo de Buenos Aires que reforma la Carta de la Organización de los Estados Americanos y se convierta el Comité en órgano jurídico principal de la OEA. El Protocolo de Buenos Aires exige para entrar en vigencia el depósito de las ratificaciones de catorce Estados americanos; ya lo ratificaron trece pero parece existir un acuerdo entre los gobiernos

⁸ Véase reanudación del debate en el párr. 31 de la 1027.^a sesión.

para que las ratificaciones que faltan se verifiquen a fines de 1969, con el objeto de que empiece a regir la nueva Carta en 1970, para evitar el grave problema que existirá si ratifican catorce países y siete no lo hacen.

69. En el año actual, el Comité estudiará también el importante problema del perfeccionamiento del sistema interamericano de soluciones pacíficas. El Pacto de Bogotá⁹ consagra una serie de procedimientos para obtener la solución pacífica y jurídica de cualquier controversia que surja entre los Estados americanos, a saber: comisiones de buenos oficios y de mediación, procedimientos de investigación, conciliación y arbitraje, y recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero su eficacia se ha reducido porque hay todavía una minoría que no quiere ligarse por el Pacto, de manera que una controversia con un Estado que adopte esa postura no recibe resolución, hecho lamentable que en la práctica ya ha ocurrido.

70. El Comité estudiará también el problema de la condición jurídica de los llamados «guerrilleros extranjeros», o sea de las personas que participan en movimientos rebeldes o en acciones de guerrilla en país extranjero junto con los revolucionarios locales. Como ello ha dado lugar a ciertas diferencias entre varios países americanos, por lo que hace a los procedimientos de extradición, a la aplicación de las normas que regulan el asilo político, a la calificación de los guerrilleros como delincuentes políticos o como delincuentes comunes, como también en lo referente a la internación en el país de asilo o al envío del guerrillero al país de origen, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos decidió encargar al Comité un estudio de la cuestión en sus variados aspectos para ver si puede obtenerse una reglamentación, o elaborarse una convención o un protocolo sobre la materia. El Gobierno de México ha opinado que se trata de un asunto que no debe incluirse en reglamentaciones internacionales sino dejarse en el campo del derecho interno de cada país.

71. El Comité también se interesa por la cuestión de la responsabilidad de los Estados, tema que figura en el programa actual de la Comisión. En su reciente informe (A/CN.4/217), el Relator Especial, Sr. Ago, menciona el informe aprobado por el Comité en 1961 titulado: «Contribución del continente americano a los principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado». En este informe, el Comité enuncia diez principios que son la expresión del derecho latinoamericano en esta materia y que establecen que la intervención en los asuntos internos o externos de un Estado no es admisible como sanción de la responsabilidad de ese Estado. Enuncia luego el principio de plena igualdad entre nacionales y extranjeros al establecer que el Estado no es responsable de los actos u omisiones respecto de los extranjeros sino en los mismos casos y bajo las mismas condiciones especificadas en su legislación respecto de sus nacionales.

72. Estos principios también establecen un concepto restrictivo de la denegación de justicia, que no existe cuando los extranjeros han agotado los recursos ante los tribunales locales competentes en la materia. El

principio VIII, por ejemplo, establece: «b) El Estado ha cumplido su deber internacional cuando la autoridad judicial pronuncia la decisión, aun si declara inadmisibles la demanda, acción o recurso interpuesto por el extranjero. c) El Estado no es internacionalmente responsable por la resolución judicial cuando no fuere satisfactoria para el reclamante.»

73. Confía en que la Comisión, al debatir el tema de la responsabilidad de los Estados, tendrá en cuenta la posición latinoamericana como un elemento nuevo que ha modificado las normas anteriormente aceptadas de derecho internacional. En su informe, el Comité dice lo siguiente: «Ese aporte americano modificó las nociones anteriormente admitidas por el derecho internacional. Ese aporte americano modificó sustancialmente determinadas situaciones y para convencerse de ello basta referirse a cualquiera de los principios, por ejemplo la Doctrina Drago, y preguntar: ¿se han repetido en los últimos años los hechos que la originaron? La respuesta negativa demuestra, con singular elocuencia, la eficacia de la doctrina y la circunstancia de que ella se ha impuesto en el concierto universal de naciones.»

74. El Comité luego agrega: «Lo que ocurre es que el derecho internacional no es inmutable, que evoluciona y debe evolucionar. . . Con la aparición de nuevos Estados como sucedió en el continente americano, tienen que aparecer otras doctrinas, otros conceptos del derecho, que se van imponiendo con el transcurso del tiempo, por la fuerza de su justicia. Los países latinoamericanos, hoy día con más de 200 millones de habitantes y que han alcanzado un grado avanzado de civilización, han señalado normas que deben incorporarse en el derecho universal. Porque el derecho internacional se modifica o se forma por obra del derecho de necesidad o derecho de conservación; hay necesidades de los pueblos que requieren, para ser satisfechas, de nuevas normas, o éstas deben surgir para mantener los principios esenciales al funcionamiento de una nación o de una comunidad internacional.»

75. Para terminar, desea expresar su satisfacción por la feliz conclusión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, celebrada en Viena; la adopción de la Convención de Viena constituye la culminación de un destacado esfuerzo de codificación del derecho internacional por parte de la Comisión, en general, y de algunos de sus miembros, en particular. Se enorgullece del hecho de que, entre los 32 primeros signatarios de la Convención de Viena, figuren 16 Estados latinoamericanos.

76. El PRESIDENTE, después de dar las gracias al Sr. Caicedo-Castilla por su interesantísima intervención y por sus amables palabras para la Comisión y sus miembros, le pide que transmita al Comité Jurídico Interamericano el reconocimiento de la Comisión por la lisonjera resolución que aprobó en su período de sesiones anterior en relación con la labor llevada a cabo por la Comisión de Derecho Internacional. En nombre de la Comisión, hace votos por que perduren las relaciones de cooperación establecidas entre la Comisión y el Comité Jurídico Interamericano.

⁹ Véase Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 30, pág. 56 y ss.

77. El Sr. CASTAÑEDA felicita al Sr. Caicedo-Castilla por su intervención tan interesante y constructiva, que es la mejor prueba de la necesidad de mantener relaciones estrechas entre la Comisión y el Comité Jurídico Interamericano. El tema de las consultas, concretamente, que la Comisión ha debatido en esta misma sesión, es una cuestión en la que los países latinoamericanos han aportado una contribución importante al desarrollo del derecho internacional. El continente latinoamericano ha contribuido asimismo de manera original e importante al estudio del tema de la responsabilidad de los Estados, que también figura en el programa del actual período de sesiones de la Comisión. Confía en que continuará la cooperación entre la Comisión y el Comité, no sólo con respecto a esos temas sobre los que tienen opiniones idénticas, sino también respecto de aquellos en que parten de puntos de vista diferentes, como demuestran los nuevos esfuerzos realizados en América Latina para crear un régimen jurídico apropiado a su integración económica.

78. El Sr. KEARNEY da las gracias al Sr. Caicedo-Castilla por su interesante informe y dice que su país es miembro del Comité Jurídico Interamericano, aunque no es un Estado latinoamericano, participa activamente en sus trabajos y lo considera como una gran tribuna mundial para el desarrollo del derecho internacional.

79. El Sr. TABIBI dice que la región asiática también abraja un profundo respeto por los trabajos del Comité Jurídico Interamericano. Personalmente, le ha impresionado de manera especial la solidaridad con los países africanos y asiáticos de que han dado pruebas los países latinoamericanos al figurar entre los primeros signatarios de la reciente Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

80. El Sr. USTOR y el Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dan las gracias al Sr. Caicedo-Castilla por su exposición.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1000.^a SESIÓN

Lunes 16 de junio de 1969, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV

Presentes: Sr. Bartoš, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castrén, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr. Kearney, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sr. Yasseen.

Quinto Seminario de derecho internacional

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes en el quinto Seminario de derecho internacional y concede la palabra al Director del mismo.
2. El Sr. RATON (Director del Seminario de derecho internacional) pone de relieve los esfuerzos que se han

realizado en lo relativo a la distribución geográfica de los participantes en el Seminario. De 23 participantes, 13 proceden de países en desarrollo, gracias a la generosidad de varios Estados y a la colaboración del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas, que han financiado becas. El Sr. Raton expresa su agradecimiento a los miembros de la Comisión de Derecho Internacional que han accedido a pronunciar conferencias ante los participantes; sin su colaboración no hubiera podido celebrarse el Seminario.

3. El PRESIDENTE felicita al Sr. Raton y le da las gracias en nombre de la Comisión de Derecho Internacional por los esfuerzos incesantes que ha desplegado para asegurar el éxito del Seminario desde su comienzo.

Sucesión de Estados y de gobiernos: sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados

(A/CN.4/216)

[Tema 2 b del programa]

4. El PRESIDENTE invita al Sr. Bedjaoui, Relator Especial, a presentar su segundo informe sobre sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (A/CN.4/216).

5. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que la Comisión, en su anterior período de sesiones, decidió comenzar por el examen de los aspectos económicos y financieros de la sucesión de Estados. El Sr. Bedjaoui ha querido abordar en primer lugar los derechos adquiridos en esta esfera para esclarecer de inmediato un problema confuso, que considera fundamental. No insiste en la importancia decisiva de las consideraciones políticas que desvirtúan los aspectos puramente técnicos y jurídicos del problema y que no son ajenas a las soluciones contradictorias que se han adoptado hasta la fecha cuando se ha tratado de resolver los problemas de los derechos adquiridos. Desgraciadamente, estas consideraciones hacen que sea muy delicada la tarea de la Comisión; no obstante, es necesario poner orden en esta materia.

6. Al Sr. Bedjaoui le ha parecido oportuno tomar como punto de partida la igualdad de los Estados, y especialmente del Estado predecesor y el Estado sucesor. En efecto, no existen en derecho internacional público categorías de Estados tales como Estado normal y Estado sucesor y, si hubiera cierta diferencia teniendo en cuenta las obligaciones que incumben al Estado sucesor, convendría no olvidar las consideraciones siguientes: en primer lugar, que en diversas resoluciones, la Asamblea General ha invitado a los Estados a tomar en consideración la experiencia y los problemas de los Estados recientemente independizados con miras a reforzar su soberanía e independencia; en segundo lugar, habría que preguntarse en qué medida son compatibles los derechos adquiridos con la soberanía permanente de los pueblos y las naciones sobre